DESHONESTIDAD Y CORRUPCIÓN: EL CÍRCULO VICIOSO DE LA "DEMOCRACIA DE ESTÓMAGO" EN COLOMBIA

Por Diego León Caicedo Muñoz

"La corrupción de los pueblos nace de la indulgencia con los vicios, más que de la tolerancia con los errores." — José Martí

La deshonestidad y la corrupción son fenómenos estrechamente vinculados, aunque no idénticos. La deshonestidad constituye un concepto amplio que abarca la falta de integridad, honradez y transparencia en cualquier ámbito —personal, social o comercial— y se convierte en la base sobre la cual germina la corrupción. Esta última puede definirse como la deshonestidad aplicada al ámbito público y del poder, que implica el abuso de una posición para beneficio propio en detrimento del Estado y la ciudadanía. Como señalan Arévalo, García y Ortiz, la corrupción en Colombia es un fenómeno **estructural, cultural y sistémico** que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones.

En el contexto colombiano y latinoamericano, la deshonestidad se ha configurado como un problema cultural, producto de una mezcla de indiferencia social y factores históricos. Desde la época colonial y republicana se fomentaron prácticas tramposas que reforzaron la "viveza" como estrategia de supervivencia. Incluso Simón Bolívar llegó a proponer la **pena de muerte para los corruptos**, consciente de los efectos devastadores de este mal en la naciente república. Como advierte Villamil, la corrupción en Colombia ha sido históricamente tolerada y normalizada, lo que ha permitido su reproducción en distintos niveles de la sociedad. Tal aceptación llegó a ser tan común que el presidente Julio César Turbay Ayala popularizó en su campaña la frase: *"Hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones"*, expresión que, lejos de ser ejemplar, terminó por reforzar la idea de que el saqueo era inevitable. En la práctica, se convirtió en el complemento de otra célebre sentencia del imaginario colombiano: *"El alcalde roba, pero se ven las obras"*, reflejo de una cultura que justifica la trampa siempre que deje algún beneficio visible.

La viveza cotidiana —saltarse una fila, copiar en un examen, apropiarse de lo ajeno— se convierte en caldo de cultivo de la corrupción política. Cuando un individuo accede a un cargo público reproduce esas prácticas en detrimento de toda la sociedad, saqueando el erario y afectando directamente el crecimiento económico, la educación y la democracia. Perry y Saavedra subrayan que la corrupción tiene un impacto directo en el desarrollo económico y en la profundización de la desigualdad.

En el ámbito político, la corrupción se manifiesta a través del populismo, el clientelismo y la llamada "maquinaria política". Este entramado involucra a comerciantes, empresarios, industriales e incluso actores ilegales, quienes financian campañas a cambio de privilegios futuros. El resultado es lo que se ha denominado la "**democracia de estómago**", donde los votos se compran con dinero, alimentos o promesas de trabajo, y los recursos invertidos en campañas se recuperan mediante

contratos y coimas. Como lo expresó un gobernador colombiano, los primeros años de gestión se dedican a pagar las deudas políticas y los últimos a enriquecerse personalmente, perpetuando el círculo de impunidad.

Según una investigación de Juan Gossain publicada en *El Tiempo* en junio de 2019, la Contraloría General calculó que la corrupción le cuesta a los colombianos la descomunal cifra de **140.000 millones de pesos diarios**, lo que equivale a cerca de **50 billones de pesos al año.** Se trata de un drenaje constante de recursos públicos, de lunes a lunes, que supera con creces cualquier reforma tributaria. Y esa estimación corresponde a hace seis años: hoy la cifra sería aún más monstruosa si se suman además los recursos perdidos por evasión, elusión y contrabando. **¿Cuántas reformas tributarias nos ahorraríamos si se frenara este saqueo?**" El panorama revela que la corrupción no solo empobrece al Estado, sino que también convierte en inútiles los esfuerzos fiscales, perpetuando la desigualdad y la desconfianza ciudadana.

La lucha contra la corrupción en Colombia está sobrediagnosticada. No se puede exigir a la ciudadanía que abandone la "viveza" si sus líderes no dan ejemplo. Mientras se continúe eligiendo a los mismos actores políticos, el saqueo de las arcas públicas persistirá, sin importar la ideología o el partido al que pertenezcan. La corrupción no tiene color político y representa siempre las dos caras de la misma moneda. Como advierte Luis Miguel Ramírez Aristiguieta, el éxito económico de países como Japón, Corea del Sur o Singapur no se explica únicamente por dinero o inversión extranjera, sino por la existencia de sociedades que **respetan las reglas, premian el mérito y sancionan la trampa**. Este tipo de transformación no se alcanza mediante leyes, decretos o la buena voluntad de algunos funcionarios, sino a través de un **cambio cultural profundo y sostenido en el tiempo**, una renovación de valores que requiere décadas para consolidarse.

Romper este círculo vicioso va más allá de los discursos populistas: exige mecanismos irrevocables de transparencia, una justicia que persiga con igual rigor el delito de cuello blanco y el pequeño hurto, cárceles sin privilegios para funcionarios corruptos y, sobre todo, un cambio cultural que involucre tanto a líderes como a ciudadanos. Solo así será posible superar la "democracia de estómago" y construir un Estado Social de Derecho sólido y legítimo.

En nuestras manos está la responsabilidad, en este 2026, de elegir a quienes representen con honestidad y compromiso al Congreso, y al mejor líder para la Presidencia. **Solo así podremos empezar a romper el círculo vicioso de la corrupción y construir una democracia que responda al interés colectivo.**